

ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396
DOI: <https://doi.org/10.14201/alh2016741538>

CONSTRUYENDO CIUDAD DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA PERIFERIA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

*City building from the social organizations in eastern periphery
of Mexico City*

Luisa F. RODRÍGUEZ CORTÉS

*Cátedra CONACYT, Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México
✉ luisafernanda_rodriguez@yahoo.com*

Fecha de recepción: 9 de octubre del 2013
Fecha de aceptación y versión final: 26 de enero del 2015

RESUMEN: El desarrollo de la Ciudad de México ha conllevado la configuración de un espacio social y político, marcado por la fuerte presencia de procesos organizativos que se articulan con formas clientelares de intercambio. Este artículo indaga en esa imbricada relación a partir de dos organizaciones sociales que se desarrollan en el oriente de la ciudad. Se argumenta que las organizaciones sociales se han adaptado a los cambios sociales de los últimos veinte años, pero permanecen como ejes centrales de las relaciones políticas, así como de la configuración del espacio social en la periferia oriente de la Ciudad de México.

Palabras clave: organizaciones sociales urbanas; clientelismo; prácticas políticas; periferia urbana; Ciudad de México.

ABSTRACT: The development of Mexico City has led to a social and political space marked by the strong presence of social organizations which are connected with clientelistic forms of exchange. This article explores these interwoven relationships from the study of two social organizations that develop in the east of the city. It is argued that social organizations have adapted to social changes of the last twenty years, but remain as central actor into the political relationships, as well as in the configuration of social space in the eastern periphery of Mexico City.

Key words: urban social organizations; clientelism; political practices; urban periphery; Mexico City.

I. INTRODUCCIÓN¹

La producción de las ciudades ha generado un tipo de desarrollo que en el territorio y en la estructura social es fragmentado y diferenciado. Las características del capitalismo en la etapa actual, como la especulación inmobiliaria, la generación de una urbanización fragmentada, la primacía del mercado en la planeación y/o la falta de la misma, los programas de ajuste económico y su materialización espacial, han derivado en ciudades polarizadas y divididas donde gran parte de la población queda relegada a las periferias pobres. América Latina no ha sido la excepción; aquí el crecimiento urbano no ha conllevado únicamente la instauración de un paisaje particular, sino la producción, reproducción y disputa de un orden social diferenciado y diferenciador que se concreta en el espacio.

Sin embargo, la producción del espacio no ha sido sólo resultado de una imposición de arriba hacia abajo, ni ha dependido exclusivamente de la acción del Estado y de las entidades de gobierno. El espacio urbano, como materialización del orden social y político, es constantemente reproducido, disputado y reconfigurado desde los sujetos mismos en sus relaciones y prácticas cotidianas. En este contexto, las organizaciones sociales urbanas han jugado un papel central en la producción del espacio, logrando alterar patrones de segregación y haciendo frente a las condiciones de vulnerabilidad y precariedad mediante la lucha por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, tales como el acceso a servicios básicos, el derecho a la vivienda e incluso el derecho a la ciudad.

El presente artículo busca analizar las prácticas políticas y sociales que han llevado a cabo dos organizaciones que se desarrollan en la periferia oriente de la Ciudad de México, con el objetivo de entender las implicaciones en el tejido urbano que las rodea. Se discute en torno a la encrucijada propia de las relaciones y prácticas políticas de las organizaciones, las mismas que están en constante transformación bajo el marco de las formas clientelares presentes históricamente en la Ciudad de México. Al respecto, se argumenta que las organizaciones sociales urbanas son el principal medio que tienen los sectores menos favorecidos para acceder a bienes y servicios públicos. Éstas se han adaptado a los cambios políticos y sociales que ha vivido la ciudad, pero aun así continúan siendo ejes centrales que influyen en las relaciones y prácticas de los habitantes de la periferia, a la vez que dan forma y contenido al espacio urbano.

Se desarrolla una visión de la transformación de la periferia de la ciudad y de la adecuación de las organizaciones sociales al nuevo marco de relaciones sociales y políticas. Los resultados se basan en el trabajo etnográfico y de entrevistas en profundidad realizados con dos organizaciones sociales². Por una parte, una organización de demandantes de vivienda que se enfoca en la obtención de habitación para personas de bajos

1. La autora agradece los comentarios y las sugerencias de dos evaluadores anónimos de *América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales*, a una primera versión de este artículo.

2. Este documento se enmarca en la investigación «Construyendo ciudadanía en contextos de exclusión social: dos procesos organizativos en Iztapalapa, Ciudad de México», realizada para

recursos, habitantes de la periferia oriente y, por la otra, un grupo de adultos mayores derivado de un programa social que entró en vigor en 2002 en la delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México³. Bajo este escenario, se buscó reconstruir las historias de vida de los sujetos que habitan la periferia y dar cuenta de las dinámicas que han puesto en marcha para modificar sus formas de habitar la ciudad.

El documento se divide en cinco apartados. En el primero se discuten las nociones de intercambio clientelar y formas organizativas, las cuales son la base del posterior análisis. En la segunda sección, se presenta el contexto de las organizaciones sociales en la periferia oriente de la Ciudad de México. Posteriormente, en los apartados IV y V se analizan los casos de las dos organizaciones sociales urbanas, rescatando testimonios directos y la observación participante realizada durante el trabajo de campo. Por último, a manera de conclusión se proponen líneas generales de discusión y se busca abrir el camino para el avance de la investigación sobre las organizaciones urbanas contemporáneas.

II. PROCESOS ORGANIZATIVOS Y FORMAS DE INTERCAMBIO CLIENTELAR EN EL CONTEXTO URBANO

La producción de las ciudades en América Latina ha impulsado, por una parte, presiones para el avance de derechos y, por la otra, ha creado nuevas expectativas y demandas hacia el Estado. Esta doble dinámica ha posibilitado la emergencia de formas organizativas, pero también la instauración de redes de intercambio político como mecanismos para acceder a bienes y servicios públicos. Dicho de otro modo, en las ciudades se ha promovido la creación de nuevos espacios de participación y de reclamo de derechos por parte de diferentes grupos sociales, pero también ha sido en las ciudades donde las precarias condiciones de vida y la primacía de las necesidades de sobrevivencia han excluido de la esfera pública a grandes sectores de la población y han facilitado la instrumentalización de sus demandas por parte de líderes locales.

El cruce entre formas de intercambio clientelar y la presencia de organizaciones sociales, también articuladas en movimientos urbanos populares, han sido eje fundamental de la construcción física, social y política de las ciudades actuales. Es mediante las acciones e iniciativas de los sujetos en formas organizativas, de la presión y demanda hacia el Estado, así como de los procesos de autoconstrucción, que las ciudades de la región se han cimentado (Holston 2008). Allí se ha configurado un espacio social y político que se expresa en la experiencia de la ciudad, en los modos de habitar, en la relación con el otro y con las instituciones. En otras palabras, la organización socioespacial, en

obtener el título de Doctora en Antropología, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

3. Las delegaciones corresponden a la división político-administrativa mediante la cual se organiza el Distrito Federal. La Ciudad de México hace parte de la Zona Metropolitana del Valle de México que está compuesta por dieciséis delegaciones pertenecientes al Distrito Federal y sesenta municipios conurbanos del Estado de México y del Estado de Hidalgo (INEGI 2010).

términos de los ordenamientos simbólicos y materiales del espacio y el tiempo, «conforman un marco para la experiencia por el cual aprendemos quiénes y qué somos en la sociedad» (Harvey 1998: 239).

En este sentido, la producción de las ciudades en América Latina refleja un amplio espectro de estrategias y herramientas utilizadas tanto por los sujetos, como por el Estado, en una construcción conflictiva del espacio social urbano. En las zonas con menores recursos se muestra más claramente cómo el crecimiento y avance de la ciudad da cuenta de un tipo específico de relaciones políticas, que se reproducen a partir de líderes locales, formas organizativas y comunitarias, la presencia de partidos políticos o, incluso, la indiferencia social. Es allí donde surge la imbricada tensión entre las organizaciones sociales, los movimientos u otras formas organizativas y las relaciones de intercambio clientelar. Dicha relación no corresponde a un proceso lineal donde primero surge la organización comunitaria y «autónoma» que posteriormente se corrompe y establece relaciones de tipo clientelar; por el contrario, los límites son borrosos ya que ambos pertenecen al mismo proceso de configuración de las relaciones políticas y de producción del espacio en las ciudades actuales latinoamericanas. Recuperando a Galindo (1985), se destaca que, en la región, la urbanización ha estado fuertemente marcada por la dimensión política de la organización social.

Con el objetivo de entender el papel que tienen las organizaciones sociales en la configuración del espacio social y político de las ciudades, es preciso empezar por delimitar dos ejes claves en el análisis: el clientelismo o intercambio clientelar y las formas organizativas. En primer lugar, es útil recuperar la definición clásica de clientelismo elaborada por Luis Roniger (1994), quien propone que éste es un tipo de intercambio social, el cual se construye sobre una base asimétrica, que proporciona mutuo beneficio a los miembros del intercambio, el cual se fundamenta en el control diferenciado del acceso a recursos y el flujo de éstos en las sociedades estratificadas.

Cabe señalar, siguiendo a Auyero (2001), que las redes informales y clientelares existen con anterioridad a su manifestación e implican representaciones culturales compartidas, las cuales hacen parte de la vida diaria de los sujetos que viven en situaciones de privación material. Estas redes son resultado de un proceso largo de interacciones que, aunque usualmente se inician con un favor, deben ser continuamente cultivadas y practicadas. La permanencia, en el mediano y largo plazo, de dichas redes conllevan el establecimiento de relaciones de confianza, solidaridad, una idea de un «mejor futuro», familiaridad y reciprocidad en el intercambio entre patrones, mediadores y clientes (Auyero 2001).

Es preciso destacar dos dimensiones del clientelismo que usualmente pasan desapercibidas. La primera es que el clientelismo es más que el intercambio de votos por favores; éste involucra prácticas cotidianas donde se construyen lazos de solidaridad y reciprocidad que trascienden el periodo electoral. Si bien el proceso electoral es parte importante dentro del intercambio, éste no es el único momento de una relación que, a partir de la resolución de problemas de la vida cotidiana, refuerza identidades socio-políticas, a la vez que provee bienes y favores (Auyero 2000). La segunda dimensión es que, en el contexto de reestructuración del Estado y el desplazamiento de su rol como

garante de la seguridad social, el clientelismo ha adquirido rasgos de una red informal de sobrevivencia, más allá de una de provisión de bienestar. Es decir que a través de las redes clientelares se tiene acceso a bienes básicos como alimentos, medicamentos, servicios de salud, vivienda, entre otros, que antes eran cubiertos por mecanismos formales. Hoy es claro que las redes de apoyo se superponen y articulan con las redes políticas. En palabras de Auyero, «las estrategias de sobrevivencia están ancladas en una red política de solución de problemas porque se expresan en las interacciones entre agentes de un partido político o un funcionario estatal y los residentes de la villa» (2001: 100).

Lo anterior evidencia el papel e importancia del clientelismo dentro del contexto político y económico como mecanismo de acceso al flujo de recursos públicos y como esquema de relaciones fundadas en la reciprocidad y confianza (Adler-Lomnitz *et al.* 2004). Si bien el clientelismo es un canal a través del cual se distribuyen recursos de arriba hacia abajo, mientras se obtiene respaldo, apoyo y a veces votos de abajo hacia arriba, éste también reproduce una forma de relacionarse con el otro, de pertenecer a la comunidad, de participar social y políticamente; una forma de saber y hacer en el ámbito político.

El segundo eje importante para el análisis se centra en las formas organizativas que se materializan en organizaciones sociales de pequeña, media y gran escala o, incluso, en lo que se denominó movimiento urbano popular. Cabe señalar que el estudio del movimiento urbano popular, tanto en México como en otras ciudades de la América Latina, tuvo auge en los años setenta y ochenta, debido, en gran medida, al aumento significativo de la población de pobres urbanos (migrantes y locales) y su inscripción en formas organizativas de mediano y gran alcance (Moctezuma 1984; Alonso 1986; Castells 1986). Sin embargo, a partir de la década de los noventa, la importancia de los movimientos urbanos populares es desplazada dentro del marco analítico de las ciencias sociales, que dejan atrás conceptos y teorías de raíces marxistas, para ahondar en estudios sobre la democracia, fortaleciendo conceptos tales como ciudadanía, participación, organizaciones sociales, entre otras.

No obstante este desplazamiento analítico (desde los movimientos urbanos hacia nuevas formas de participación ciudadana), no es posible hacer a un lado la importancia de las formas organizativas, entre éstas los movimientos urbanos populares, tanto en la producción del espacio urbano, como en la configuración de prácticas políticas y sociales a nivel local. Por ende, para entender la configuración social del espacio en las periferias pobres de las ciudades latinoamericanas se debe tener en cuenta el papel que los movimientos y organizaciones urbanas tuvieron, y tienen hoy, en el establecimiento de las relaciones entre los sujetos y el Estado, y así como en la construcción misma de la ciudad.

En este contexto, es de utilidad recuperar el análisis que Raúl Zibechi realiza sobre los movimientos sociales urbanos. Zibechi (2008) propone que el estudio de este fenómeno debe iniciar por tener en cuenta no sólo los esquemas de organización y los repertorios de movilización (temas clásicos en el estudio de los movimientos sociales) (Berrío Puerta 2006), sino las relaciones sociales y los territorios, es decir, los flujos y las circulaciones que implican un «movimiento societal», y no sus estructuras. De este

modo, Zibechi retoma la noción de «movimiento societal» (original de Luis Tapia), para estudiar el papel de los procesos organizativos que buscan transformar las relaciones sociales y que emergen bajo formas de dominación.

Esto hace posible incorporar en el análisis los movimientos y organizaciones que buscan modificar las relaciones sociales imperantes, aun cuando estos movimientos y organizaciones no se encuentren formalmente constituidos, con dirigentes o con un programa político definido; muchas veces el «movimiento societal» se desarrolla desde los sujetos que en la cotidianidad se convierten en agentes del cambio social (Zibechi 2008). Así, incluso organizaciones de pequeña escala pueden impulsar un movimiento societal en la medida en que buscan transformar sus espacios de vida. En palabras de Luis Tapia (2008: 55) «lo característico de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para hacer política sino que, a partir de algún núcleo de constitución de sujetos, organización y acción colectiva, empieza a transitar y politizar los espacios sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas, proyectos». En este sentido, las formas organizativas urbanas hacen llegar sus demandas a ámbitos externos a la política institucional, desestabilizan los marcos políticos de acción tradicionales e irrumpen en lugares no esperados para reclamar por la mejora de sus condiciones de vida, a la vez que transforman y reconstruyen sus barrios y colonias.

De acuerdo con Zibechi (2008), las periferias de las grandes ciudades han ido formando un «propio mundo», resultado de la apropiación de la tierra para la creación de territorios, en donde emergen nuevas subjetividades y nuevos sujetos políticos. Este «propio mundo» ya no está conformado por la clase obrera sindicalizada, actor principal durante gran parte del siglo XX, sino que se constituye en territorios articuladores de nuevos oficios que hacen frente a la creciente desocupación. Así, el territorio es un eje central, dado que la lucha por la configuración espacial de la ciudad también es la lucha por la transformación en las relaciones políticas y sociales que allí se reproducen.

Esta perspectiva permite incluir un conjunto de formas organizativas que, por su tamaño, carácter acotado y objetivos en el corto plazo, habían sido excluidas de los estudios de los movimientos urbanos populares. Como se verá en el siguiente apartado, este tipo de formas organizativas están presentes en las ciudades actuales y constituyen un nicho donde se promueven el trabajo en grupo, la construcción de solidaridades y redes de apoyo, así como otras dinámicas grupales que tienen un sentido tanto interno como externo en la transformación de sus espacios de vida. De esta manera, el lugar donde se arraigan los movimientos sociales deja de ser un espacio neutro o un medio de producción, y empieza a entenderse como una creación político-cultural de modos de vida diferentes (Zibechi 2008).

Cabe destacar que, desde la perspectiva de «movimiento societal», la relación que establecen los sujetos con el Estado, los partidos, la Iglesia, entre otros actores, es fundamentalmente una de tipo instrumental. En contraste con las relaciones de tipo clientelar que se reseñaban anteriormente, para Zibechi (2008) las relaciones instrumentales dan cuenta del encuentro entre dos mundos diferentes y opuestos, encuentro en el cual no se espera del otro sino obtener una ventaja o beneficio específico. Si bien hay diferencias conceptuales entre definir las formas de intercambio como relaciones clientelares

o instrumentales, dado que se fundamentan en dos concepciones particulares sobre los sujetos y su relación con el Estado, se debe reconocer que, en la realidad social, ambas formas son fácilmente articulables.

En este análisis no se busca contraponer las redes clientelares y los movimientos sociales urbanos. Por el contrario, se reconoce que ambos han hecho parte de la conformación, en el largo plazo, de las relaciones y prácticas políticas entre los sujetos y el Estado y, así, de la producción social del espacio urbano. En esta medida, al interior de los movimientos urbanos se articulan las contradicciones propias de los proyectos populares que conviven con relaciones de tipo clientelista y/o instrumental. En la medida en que la producción de las ciudades resulta de la disputa por los recursos urbanos, tales como espacios, bienes y servicios públicos, los sujetos ponen en marcha diferentes medios que van desde la movilización pasiva hasta la presión y la negociación (Alonso 1986).

Es de considerar que las prácticas, repertorios, relaciones y formas de acción de los habitantes de la periferia requieren de una constante actualización de acuerdo a las transformaciones propias de los sistemas políticos locales y nacionales. En tal medida, los arreglos y la tensión entre las formas organizativas y las relaciones de intercambio clientelar dependerán tanto de la coyuntura política, como de la presencia de experiencias y aprendizajes adquiridos en el largo plazo. Esto se evidencia en la Ciudad de México, donde las modificaciones al sistema político local realizadas a lo largo de la década de los años noventa han conllevado nuevos retos para la permanencia de los procesos organizativos y han trastocado su relación con los líderes e instituciones en el ámbito local.

III. DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La forma como se ha construido la Ciudad de México no ha escapado a la profunda tensión entre las prácticas organizativas y de intercambio clientelar. Por el contrario, la ciudad se ha configurado física y socialmente a partir de los arreglos, disputas, reclamos y acuerdos producto de las demandas de los habitantes menos favorecidos por mejorar sus condiciones de vida, así como de las acciones llevadas a cabo por los líderes locales y el gobierno de la ciudad de manera tanto institucional, como informal.

Durante el siglo XX, y aún en la actualidad, el acceso a servicios urbanos básicos por parte de los pobladores de la periferia⁴ de la Ciudad de México dependió tanto del éxito de las relaciones con el partido oficial y el gobierno (en términos de la demostración

4. La idea de periferia se entiende aquí más allá de una referencia física geográfica, es decir, este concepto da cuenta de la relación de mutua dependencia en la producción social del espacio, en la cual las partes que la componen se definen una a la otra a través de aparatos de dominación y resistencia (J. HOLSTON 2008). Por ende, la noción de periferia no se refiere exclusivamente a la distancia geográfica con respecto al centro, sino que sintetiza la relación social y política que configuran los habitantes de estas zonas con los otros, con quienes concentran el poder económico y político, relación propia

de lealtad, militancia y presencia política), como de la capacidad para hacer escuchar sus demandas, confrontando o negociando con las instituciones del Estado y/o convirtiendo sus necesidades en monedas de cambio en el marco de las relaciones políticas a nivel local.

La delegación Iztapalapa, al oriente de la ciudad, ha estado marcada, históricamente, por la tensión entre la emergencia del movimiento urbano popular y la fuerte presencia de relaciones de intercambio clientelar. Esta delegación se caracteriza por el rápido crecimiento urbano y poblacional que sufrió durante la segunda mitad del siglo XX y que implicó un rezago en la oferta de vivienda, servicios básicos y equipamientos colectivos para gran parte de su población. Actualmente, Iztapalapa cuenta con casi 2.000.000 de habitantes y mantiene un precario acceso a bienes y servicios básicos (INEGI 2010).

Un rasgo particular de la delegación Iztapalapa es la gran presencia que han tenido los procesos organizativos, como una constante entre las poblaciones con menores recursos. Estos procesos han sido muy variados y dan cuenta de diferentes prácticas políticas, estrategias y repertorios de acción, que marcan la relación entre las organizaciones y las instituciones del Estado. No obstante, lo que tienen en común es una mentalidad, una forma de saber y de hacer las relaciones sociales y políticas, un modo de actuar que permea el espacio urbano y que da forma a las prácticas desde un sujeto colectivo.

Los procesos organizativos en la delegación se fundamentan en el bagaje cultural de los pueblos tradicionales⁵; en la readaptación de formas comunitarias provenientes de los migrantes que poblaron la periferia a lo largo del siglo pasado, y en las formas colectivas de pequeña y mediana escala que demandaban el acceso a bienes y servicios básicos urbanos. Es sobre esta base que tomó forma el movimiento urbano popular en Iztapalapa durante las décadas de los años setenta y ochenta.

Si bien el movimiento urbano popular tuvo presencia en muchas delegaciones de la ciudad, en Iztapalapa encontró un nicho adecuado para su desarrollo que lo diferencia de los procesos en las delegaciones centrales (aunque no necesariamente de otras delegaciones periféricas): la fuerte demanda por el acceso a vivienda. El déficit de vivienda que se produjo a partir de los años setenta y ochenta en la Ciudad de México y en Iztapalapa es una de las razones por las cuales gran parte del movimiento urbano popular surgió y se consolidó en esta delegación. Esto debido a la existencia en esa zona de gran cantidad de terrenos baldíos, del gobierno y de entidades públicas, los cuales eran aptos para la invasión y, posterior, construcción y regularización.

La emergencia y consolidación del movimiento urbano popular constituye un aspecto fundamental en la construcción de las relaciones y prácticas políticas que perduran en la actualidad y que se expresan en la demanda por la mejora de las condiciones

de una experiencia de la ciudad que está marcada por la distancia espacial, pero también por la estigmatización y la segregación social.

5. En la actualidad existen en Iztapalapa 16 barrios o pueblos tradicionales que, aun cuando han sido integrados completamente por el crecimiento de la mancha urbana, mantienen rasgos culturales y promueven sus tradiciones a través de fiestas y celebraciones culturales.

de vida y en la transformación del espacio urbano. Un ejemplo de esto es la creación en 1980 de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), resultado del Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Populares, convocado por la Unión de Colonias Populares (UCP), el Frente Popular Tierra y Libertad, el Frente Popular de Zacatecas, el Comité de Defensa Popular de Durango, entre otras organizaciones, en el cual se gesta la Coordinadora Nacional Provisional de Colonias Populares, posteriormente llamada CONAMUP (Moctezuma 1984). Esta Coordinadora hizo posible la articulación de una amplia gama de organizaciones sociales y demandas que dieron a conocer las precarias condiciones que vivían, y aún viven hoy, los habitantes de la periferia. Así, esta Coordinadora fungió como eje aglutinador de organizaciones de izquierda de todo el país, en busca de la creación de organizaciones de masas con un poder político propio y a través de las cuales «el pueblo aprendiera a participar colectivamente» (Cuéllar 1997: 96). En este sentido, la CONAMUP fomentó procesos organizativos que, más allá de su efecto real en las comunidades, significaron y reprodujeron una forma de hacer y saber en el ámbito político.

En la Ciudad de México el impacto de la CONAMUP se manifestó en 1981 cuando se reunieron en San Miguel Teotongo, delegación Iztapalapa, organizaciones de 40 colonias del Distrito Federal y del Estado de México para formar la Coordinadora Regional del Valle de México. En la Coordinadora Regional del Valle de México se articularon, principalmente, demandas en torno al acceso a vivienda, al suelo, a servicios públicos como agua, transporte y educación, así como la reducción de impuestos prediales y las remodelaciones, entre otras. A grandes rasgos, el interés de la Coordinadora del Valle de México fue promover la articulación de las luchas locales, elaborar estrategias conjuntas frente a la acción del Estado, tener un programa de acción común y fortalecer las instancias zonales de la ciudad (Moctezuma 1984).

A este proceso se sumaron, años después y como resultado de los sismos de 1985, las organizaciones de damnificados reunidos en la Coordinadora Única de Damnificados (CUD) que incluían a organizaciones de inquilinos que no habían formado parte de la CONAMUP (Bolos 1999). Los miembros de la CUD rompieron con el sistema jerarquizado impuesto en la CONAMUP y se propusieron establecer un criterio horizontal entre las organizaciones. Asimismo, las demandas y peticiones tomaron un sentido propositivo y la organización fue reconocida como interlocutor válido y obligado por parte del gobierno (Cuéllar 1997).

Durante los años noventa, el movimiento urbano popular perdió peso a la par que se produjeron un conjunto de cambios en el sistema político local. La búsqueda por democratizar el gobierno de la ciudad, a partir de acciones tales como la elección popular de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (actualmente Asamblea Legislativa del Distrito Federal), la apertura político-partidista, la elección de jefe de gobierno en 1997 y de jefes delegacionales en el año 2000, implicó la transformación tanto de los procesos organizativos, como de las relaciones entre los líderes y dichas organizaciones (Bolos 1995; Coulomb 1995; Álvarez 2004). Estos cambios trastocaron la mentalidad basada en la lucha y la confrontación propia del movimiento urbano popular y abrieron nuevos espacios de negociación en el marco de la apertura democrática de la ciudad.

En conjunto, se llevaron a cabo dos procesos simultáneos: el declive del movimiento urbano popular y el surgimiento de procesos organizativos de pequeña y mediana escala, por una parte; y la transformación institucional encaminada a la apertura democrática de la ciudad y del país, por la otra. Álvarez (2004) señala que, en la primera mitad de la década de los noventa, en la Ciudad de México los movimientos urbanos entraron en un periodo de latencia y dispersión del cual no logran recuperarse y, por el contrario, terminaron transformándose en múltiples organizaciones con diversidad de objetivos y prácticas políticas. De acuerdo con Olvera (1998), este vasto espectro de organizaciones ha significado la ampliación de los horizontes de lucha, la incorporación de nuevos temas en la esfera pública y la implementación de un sistema de acciones que disputan al Estado el «monopolio de la definición de la buena vida» (1998: 24).

En este sentido, durante las últimas dos décadas la Ciudad de México, y la propia delegación Iztapalapa, han vivido cambios importantes que se traducen en la apertura político-electoral del sistema, en la llegada al poder de un gobierno denominado de izquierda encabezado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el resquebrajamiento del movimiento urbano popular y la emergencia de múltiples organizaciones sociales de menor escala. Sin embargo, estos cambios no han frenado las crecientes desigualdades sociales y la precariedad en las condiciones de vida, las cuales en las zonas periféricas han llegado a profundizarse.

En el caso de la delegación Iztapalapa, a pesar de los avances en términos de regularización de la propiedad de la tierra y de la instalación de agua y drenaje, los grandes problemas sociales persisten y el acceso a bienes y servicios públicos continúa siendo parcial y precario. De este modo, la delegación se enfrenta tanto a problemas estructurales relacionados con la administración del territorio y la dotación y suministro de servicios públicos básicos, como a problemas de tipo coyuntural como la inseguridad, el desempleo, la informalidad y el comercio ambulante (Carrera 2005).

Es bajo este escenario que sobreviven en la actualidad algunas organizaciones sociales urbanas, las cuales se han adaptado a un nuevo esquema de oportunidades y constreñimientos políticos. Desde allí han logrado mantener sus luchas por el acceso a bienes y servicios básicos y a vivienda digna, a la vez que han adicionado nuevas demandas asociadas con el ejercicio de derechos, mejor educación, espacios recreativos, sistemas de transporte público más eficientes y económicos, entre otros. De tal manera que las demandas ya no se limitan a los derechos urbanos básicos, sino que se han encaminado a exigir, simultáneamente y de forma aún incipiente, el derecho a la ciudad.

Con el objeto de analizar el carácter de las organizaciones sociales urbanas contemporáneas existentes en la delegación Iztapalapa, a continuación se profundiza en dos procesos organizativos que se desarrollan en condiciones de alta pobreza y marginalidad. A pesar de expresar diferentes necesidades y demandas, estos casos representan un modo de actuar y de pensar en la ciudad que se ha configurado a lo largo de los últimos treinta años mediante la participación en procesos organizativos.

IV. DE LA DEMANDA POR EL ACCESO A VIVIENDA A LA DIVERSIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

La Asociación Renovación⁶ es una organización centrada en la demanda y consecución de vivienda para sectores de bajos recursos. Ésta surgió hace más de veinticinco años, como resultado del desalojo a un grupo de invasores de un terreno ejidal⁷ en la sierra Santa Catarina, en el límite oriente de la delegación Iztapalapa. A partir de este primer desalojo, un grupo es reubicado por el gobierno local en un predio baldío en la zona de Cabeza de Juárez, donde se inicia la autoconstrucción de viviendas y se consolida el proceso organizativo. La construcción de las viviendas en este predio dura alrededor de diez años y es durante ese periodo que se consolida la líder actual de la asociación.

Hoy en día la organización cuenta con más de diez predios, la mayoría en la delegación Iztapalapa, los cuales se encuentran en diferentes etapas de construcción. Hay algunos ya terminados y regularizados, otros que están asociados a programas de vivienda impulsados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), y otros que persisten como campamentos provisionales construidos con materiales no aptos (cartón, aluminio, papel) y con un acceso precario o nulo a servicios básicos⁸.

La relación entre la Asociación Renovación y las instituciones del Estado ha pasado por diferentes momentos a lo largo de su historia, de acuerdo con la coyuntura política y las demandas y necesidades prioritarias. Durante un largo periodo las prácticas desarrolladas por la asociación se caracterizaron por ser de tipo confrontacionista. Acciones como el cierre de avenidas, marchas y mítines en las entidades de gobierno eran, y son aún hoy, herramientas centrales para demandar por el acceso a bienes y servicios públicos. Este tipo de prácticas, muy comunes en el movimiento urbano popular, buscan abrir caminos de negociación con las autoridades correspondientes. Por lo cual son utilizadas como mecanismo para establecer una relación directa entre la organización y las instituciones con el objetivo de demandar y, posteriormente, gestionar la resolución de los problemas más imperantes.

6. Los nombres de las organizaciones y de las personas entrevistadas han sido modificados para mantener el anonimato de las mismas. Con esta organización se realizaron 24 entrevistas a profundidad, la mayoría individuales y algunas con más de una persona. Además se llevó a cabo observación participante en diferentes actividades de la asociación como son mítines en el Zócalo, faenas de trabajo, reuniones de trabajo, festejos comunitarios, entre otras.

7. Los ejidos son una forma de propiedad social de la tierra emanada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Gran parte del desarrollo urbano del país, y en particular de Iztapalapa, se llevó a cabo sobre terrenos ejidales, a pesar de que su compraventa estuvo prohibida hasta 1992, cuando se modificó el artículo 27 de la Constitución.

8. Los campamentos provisionales son la opción que ofrecen las organizaciones de vivienda a las personas que no cuentan con habitación. Este tipo de campamentos son construidos, en su mayoría, en predios que son tomados ilegalmente o en espacios públicos (estacionamientos, parques, avenidas), allí se construyen viviendas con materiales no aptos, las cuales son asignadas a las familias por un muy bajo costo.

Paralelamente a la demanda y presión ante las instituciones del Estado, la asociación ha impulsado acciones independientes en la búsqueda por acceder a bienes y servicios públicos. Incluso, la autoconstrucción de las viviendas se ha llevado a cabo a partir del trabajo comunitario y gracias a la iniciativa de los miembros de la organización. Claudia, tesorera de la asociación, señala la importancia de la solidaridad y apoyo que implica este proceso de autoconstrucción.

Las bardas aquí son compartidas, esta barda tanto es del vecino como mía, al principio como íbamos a economizar maravilloso y como nos conocíamos pues no teníamos ningún problema, oye yo puedo compartir con ella todo, venimos en la lucha no hay ningún problema y empezamos a ver quién puede, quién tiene tanto dinero, las casas cuestan 15.000 pesos, 7.500 de material y 7.500 de mano de obra, tienes que ahorrar 7.500 de material y tener listos 7.500 que vas a ir pagando de a 250 a la semana para el albañil. Nuestros mismos compañeros albañiles dijeron «sale, le entramos, que nos asesoren, conseguimos una supervisión técnica de los ingenieros y que nos digan cómo lo hacemos, haciendo la primera le agarramos el hilo» (Claudia, 46 años, habitante de unidad habitacional, 14/07/09).

A pesar de que la construcción de las viviendas, tanto provisionales como definitivas, es posible gracias a la iniciativa y trabajo comunitario llevado a cabo desde la organización, existe allí un conjunto de capacidades que se han tenido que desarrollar para negociar con las entidades del Estado. Por ejemplo, la construcción de las viviendas requiere cumplir con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, para lo cual la asociación ha necesitado elaborar o comprar proyectos arquitectónicos y someterlos a la autorización de las entidades correspondientes. En este proceso ha sido indispensable conocer el funcionamiento institucional del gobierno local, las entidades públicas y sus rutas burocráticas, así como los derechos y herramientas con las que cuentan los ciudadanos.

En esta medida, el acceso a vivienda ha promovido el desarrollo de repertorios de diálogo, gestión y negociación por parte de la líder de la asociación. Así, la relación con las entidades de gobierno pasa por la consecución de apoyos (materiales y maquinaria); la instalación de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad); la obtención de permisos de construcción; y el acceso a viviendas construidas por las mismas entidades de gobierno. En este contexto, las prácticas de confrontación, aunque permanecen en el repertorio de la organización, cada vez adquieren menor peso y es en la negociación donde se produce la demanda por la atención de sus necesidades. Así lo narra Cecilia, en el momento que otras organizaciones salen a realizar una marcha.

Ahora se van dizque a hacer plantones, no tiene caso, ya hay un convenio con el gobierno, no hay necesidad de desgastar a la gente... Se van para presionar, pero si ya tenemos un convenio ya sabemos que está parado por el delegado, ya sabemos que sí nos van a dar vivienda pero que hay que aguantarnos tantito. No tiene caso salir a desgastar a la gente, porque mira, salir a plantón implica gastos, implica hasta dejar de trabajar... y a la señora Laura no le gusta nada de eso, a lo mejor sí llegará el momento pero ya será porque de

veras no nos solucionan nada, ¿no? Pero mientras no arriesga nada (Cecilia, 53 años habitante de unidad habitacional, 18/07/09).

La negociación y diálogo con las instituciones del Estado le ha permitido a la asociación incorporar un discurso de derechos. La traducción de sus demandas en derechos facilita la exigencia ante las autoridades desde el ámbito formal y/o el informal. Asimismo, la implementación de prácticas de negociación le ha permitido a la asociación abrir la puerta para gestionar otras y nuevas demandas de sus miembros, tanto con actores públicos, como con privados. En esta dirección, la asociación ha agregado a su lucha otros reclamos relacionados con la mejora de las condiciones de vida en su comunidad, lo que ha promovido la diversificación de sus ámbitos de acción.

Por una parte, en el año 2003, se creó la Unión Ciudadana del Campo y la Ciudad, a partir de vínculos de la Asociación Renovación con organizaciones y cooperativas campesinas a nivel nacional. Esta organización tenía como objetivo gestionar apoyos del gobierno y comercializar en la Ciudad de México productos de grupos campesinos de bajos recursos. Así, la asociación apoya a organizaciones en los Estados de Tabasco, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Estado de México, entre otros, para tramitar proyectos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)⁹ y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Por otra parte, a mediados de 2008, se estableció legalmente la Fundación Desarrollo Tecnológico al Alcance de los Niños de México, mediante la cual la Asociación Renovación buscaba apoyar la educación en las escuelas primarias de la zona de Cabeza de Juárez (centro operativo de la organización). Un primer proyecto consistió en gestionar la donación de computadoras portátiles para que fueran distribuidas entre los niños y niñas inscritos en escuelas de la zona. Este proyecto fue impulsado a través de la organización *One Laptop per Child* (OLPC) México, la cual conocieron por medio de los contactos con líderes locales y políticos de la delegación. Para conseguir los recursos, la Fundación recurrió también a la organización Rotary México, a empresarios de la delegación Iztapalapa y a políticos locales¹⁰.

En conjunto, la emergencia de procesos organizativos paralelos a la asociación ha necesitado del refinamiento de las prácticas de gestión y negociación de los líderes, a la vez que el desplazamiento de las prácticas de presión. La negociación y gestión con el gobierno no es un tema nuevo para la asociación, sin embargo, la creación de nuevos espacios y la diversificación de las demandas ha abierto caminos para acceder a recursos y apoyos públicos y privados, así como nacionales e internacionales.

Este proceso de diversificación y profesionalización ha modificado la dinámica misma de la asociación, la cual ya no sólo busca recursos y bienes básicos para sus miembros, sino que ahora también se propone incidir en otros ámbitos. En otras palabras, la asociación ha dado un paso desde la organización por la necesidad (vivienda), hacia

9. Anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria.

10. Hasta el año 2009 el proyecto no se había realizado.

la construcción de necesidades que deben ser atendidas y gestionadas desde el proceso organizativo (comercialización de productos agrícolas en la ciudad o la consecución de computadoras para los niños y niñas de las escuelas de la colonia).

Un hecho que marca la nueva relación entre la asociación y las entidades del Estado es la utilización de instrumentos legales, que permiten a sus miembros (dentro del marco jurídico) presionar al gobierno y tener mayor información sobre sus derechos. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (creada en el 2002) y el apoyo que recibe la asociación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sede oriente, han sido dos herramientas clave para imponer sus demandas en las instituciones correspondientes. A través de la plática con Cecilia es posible vislumbrar su conocimiento sobre los subsidios y programas a los cuales la asociación tiene derecho.

Todos los subsidios siempre se los han clavado [robado], cuando sabemos que existe un subsidio y *que todos tenemos derecho a un subsidio*. Hasta ahorita, que bueno que por el gobierno Federal nosotros lo sabemos, ¿no? Ahora la señora Laura está bajando un subsidio para un predio de Tláhuac, que el gobierno Federal nos va a regalar \$52.000 pesos por familia... Entonces ahorita como que va a empezar un proyecto piloto, esperemos que ya en 20 días o en un mes, estemos sacando a ese predio que es para doscientas y tantas familias (Cecilia, 53 años, habitante de unidad habitacional, 18/07/09).

Es preciso destacar que las prácticas de negociación y gestión son aprendidas por los líderes de las organizaciones y no necesariamente por las bases. En el caso de la Asociación Renovación, la líder y las personas cercanas son quienes tienen mayor conocimiento sobre la estructura de gobierno, qué organismos canalizan qué recursos, dónde se pueden gestionar los apoyos y demás detalles necesarios para establecer una relación con el Estado desde las instituciones mismas. Este tipo de prácticas políticas son llevadas a cabo por un sector minoritario dentro de la asociación, mientras la mayoría queda por fuera de dicho proceso y sólo se involucra en las acciones de presión y/o bien en la parte final cuando se recibe el apoyo. En este sentido, la asociación sí ha logrado incorporar un discurso de derechos y ha canalizado las necesidades y demandas de sus miembros, a través de procesos de negociación y acuerdo con agentes del Estado, sin embargo, dicho proceso lo han llevado a cabo unos cuantos y no todos los miembros de la organización.

E: «¿Recuerdas alguna ayuda en especial que les haya dado la delegación?». INF.: «Lo que pasa es que no nos comentan... ellos nos manejan que así, pero realmente que nosotros sepamos no» (Patricia, 29 años, habitante de campamento, 26/11/09).

En el contexto actual una organización como la Asociación Renovación, que estaba centrada en el acceso a vivienda, ha encontrado oportunidades para desarrollarse en otros ámbitos gracias al proceso de profesionalización de los líderes. Si bien la demanda por el acceso a vivienda continúa siendo el eje central, se han sumado otras demandas que se gestionan tanto con el sector privado como con el público. Éstas facilitan el crecimiento de la base política de la asociación, mediante la adscripción de nuevos

miembros y la vinculación con diversos actores. Lo anterior reditúa tanto en el aumento de la fuerza política de la líder, como en el mayor acceso a bienes y servicios por parte de los miembros base.

Hoy en día las prácticas políticas que realiza la asociación combinan formas de presión, cada vez menos de confrontación, con mecanismos de negociación y gestión. Sin embargo, el desarrollo de estas prácticas políticas no corresponde a un proceso lineal, sino que se sobreponen y articulan, unas desde los líderes y otras desde la base. En este proceso se ha reconfigurado el espacio urbano a partir de dos aspectos simultáneos. Por una parte, la construcción de viviendas, la invasión de terrenos baldíos y la emergencia de campamentos provisionales modifican el paisaje urbano, a la vez que dejan a la vista la precariedad social que vive gran parte de la población y la cual ha sido históricamente invisibilizada. Por la otra, las prácticas y relaciones de la asociación reconfiguran el espacio urbano al abrir el camino para la emergencia de un sujeto social hasta entonces excluido de la vida de la ciudad y de la esfera pública. El posicionamiento de las demandas, así como la constitución de la asociación como un actor político válido, altera las estructuras de poder y dominación a nivel local y permite la configuración de un discurso de derechos. En suma, la asociación logra promover sus objetivos, haciendo públicas y políticas sus demandas urbanas, y utilizando mecanismos tanto formales como informales que alteran la esfera de relaciones y prácticas en la ciudad.

V. LOS PROGRAMAS SOCIALES COMO NUEVO ESPACIO DE ORGANIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN

La segunda forma organizativa que se revisará es el grupo de adultos mayores Lazos¹¹, el cual hace parte de la organización México Nuevo, con base en la sierra Santa Catarina, delegación Iztapalapa. Esta zona se caracteriza, entre otras cosas, por estar entre las que tienen los más altos niveles de precariedad social y rezago en la delegación.

A principios de los años noventa en una colonia de la Sierra Catarina se conformó la organización México Nuevo, a partir del interés del profesor Miguel por realizar actividades deportivas con niños y jóvenes de la zona. Las actividades que realizaba la organización se ampliaron y, actualmente, se llevan a cabo talleres de derechos humanos, cursos de economía doméstica impartidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), clases de baile y de tejido, así como juntas comunitarias para atender problemáticas locales. Además la organización fungió como Centro de Atención Ciudadana de un diputado local y desde 2001 coordina las actividades del grupo de adultos mayores Lazos, sobre el cual se concentró esta investigación.

11. Con el grupo de adultos mayores se realizaron 15 entrevistas, algunas con más de una persona y se realizó trabajo etnográfico a partir de la participación en actividades del grupo, tanto en reuniones como en salidas y mítines políticos. Asimismo, se realizaron dos entrevistas con expresidentes de la colonia.

El grupo de adultos mayores surgió como resultado de la puesta en marcha del Programa de Atención a Personas Adultas Mayores en la delegación Iztapalapa. Éste establece, entre otros puntos, la creación de grupos mediante los cuales esta población pueda acceder a los beneficios establecidos en el programa. En términos generales los grupos han tenido éxito, ya que se han constituido en mecanismos de socialización para una población que había estado olvidada dentro del marco político local y nacional. En el caso del grupo Lazos existen dos características importantes, la primera es la cercanía y afinidad del grupo con una facción del partido dominante en la zona y la segunda es que la mayoría de sus miembros llegaron a la sierra Santa Catarina en el inicio de su poblamiento y, por tanto, participaron de una u otra manera en la urbanización y regularización de la misma. Es decir, tomaron parte en la transformación del espacio urbano y en las prácticas políticas y sociales asociadas a dicha transformación.

Cuando las primeras personas llegaron a la zona, allí imperaba un paisaje rural propio de los sembradíos de maíz, avena, frijol, caña, y permanecían algunos animales salvajes como conejos o serpientes. En este escenario, se llevó a cabo la autoconstrucción de las viviendas en predios que, en su mayoría, adquirieron las familias con base en recursos propios y a través de acuerdos informales con los fraccionadores ilegales. Como narra Roberto, un miembro del grupo de adultos mayores, cuando llegaron a la colonia había un sentido de aislamiento y separación con la ciudad que solamente se superó años más tarde.

En ese tiempo estaba baldío, había mucho baldío, eran sembradíos de maíz y ahí empezaron a fraccionar y este pedazo donde estamos era casi de los últimos, eran de los últimos de ahí para abajo de esa manzana, de arriba no había casas; yo le decía a mi esposa «aquí siempre vamos a estar en la orilla» (Roberto, 75 años, grupo Lazos, 09/06/09).

En la medida en que se fue poblando la colonia, se conformaron las primeras organizaciones que demandaban por el acceso a los servicios urbanos básicos mínimos. Este proceso se llevó a cabo a través de espacios institucionales, principalmente el Comité de Manzana y el Presidente de Colonia¹², puestos en marcha a finales de los años setenta por el Departamento del Distrito Federal. Cabe mencionar que los Comités de Manzana estaban insertos en la estructura de poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que muchos de los líderes locales pertenecían o militaban en este partido.

El surgimiento de los Comités de Manzana en la sierra Santa Catarina se produjo en un contexto político donde, por una parte, empezaba a consolidarse el movimiento urbano popular, pero, por la otra, permanecían las organizaciones sociales ligadas a la estructura del PRI y del Estado. Esto llevó a la articulación de los líderes y la organización comunitaria con el objetivo de acceder a bienes y servicios, o bien promover

12. Los Comités de Manzana fueron creados en 1978 con la modificación a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, la cual tuvo como objetivo ampliar los ámbitos de participación ciudadana. Los Comités de Manzana estaban conformados por los habitantes de cada una de las manzanas del Distrito Federal y se constituyeron a partir de una mesa directiva integrada por un presidente de manzana, un secretario y tres vocales, todos electos por votación (L. ÁLVAREZ 2005: 112).

acuerdos con el gobierno. Como menciona Alejandra, miembro del grupo de Lazos y quien participó desde el inicio en la construcción de la colonia, los Presidentes de Manzana lograron organizar la base comunitaria de la zona.

Después quedó de presidente [Presidente de Manzana] el doctor que está ahí, Oscar, el que está ahí en la farmacia grandota que está ahí, ese quedó de presidente y ya nos llamaba «miren señoras júntense... vamos a ir a la delegación a que nos den, para hacer nuestras calles, para echar cemento a nuestras calles, para que no esté así tan feo, ustedes hagan lo posible de cortar estos palos», porque estaban unos pirulotes [árboles de la zona] bien grandotes. Ya nos íbamos con él así a las juntas, así cuando nos mandaba a traer, nos íbamos a pedir para que compusieran nuestras calles, porque era pura terracería, así después ya vino el camión, ya empezamos a escarbar las coladeras, ya taparon los tubos de las coladeras, del agua, todo eso lo trajo la delegación, todo lo trajo la delegación, entonces ya tendieron los tubos de agua, del drenaje, todo tendieron, benditos (Alejandra, 76 años, grupo Lazos, 10/08/09).

En la lucha por el acceso a bienes y servicios y en la demanda por el ejercicio de derechos básicos, tuvieron un papel importante los diferentes líderes locales que surgieron desde el contexto institucional y que se respaldaron en la organización comunitaria. Es a través de la acción de ciertos individuos que fue posible la organización y demanda colectiva de muchos servicios básicos urbanos. Actualmente la mayoría de estos líderes no están, pero permanecen en la memoria como personas que «apoyaron» a la comunidad; incluso algunos líderes se incorporaron a la vida política, local y nacional, postulándose a cargos de elección popular, en particular después de 1997. Así, la acción de líderes locales permitió impulsar procesos organizativos que abrieron los caminos y conformaron las herramientas de la relación entre los vecinos y el Estado. Allí se transformó el espacio a partir de la lucha por la incorporación (o regularización) de las colonias en la vida de la ciudad.

No obstante la importancia que tuvo el proceso organizativo en la consolidación de la colonia, durante los últimos 15 años las prácticas y las relaciones políticas han cambiado y el impulso de la participación comunitaria disminuyó una vez se obtuvieron los servicios básicos. Cabe señalar que la inclusión física en la ciudad, propia de la regularización de las colonias de la zona, no se correspondió con la inclusión social ni con la participación real de sus habitantes en la vida urbana. Por lo cual la instalación de servicios básicos no significó el rompimiento de otras desventajas sociales (desempleo, falta de educación y de servicios de salud, etc.), pero sí resquebrajó los procesos organizativos que se disolvieron en la medida en la que cumplieron sus objetivos principales. Éste es un rasgo común de las organizaciones comunitarias en América Latina, donde la consecución de los objetivos inmediatos termina desarticulando los procesos organizativos. Como lo narra Oscar, expresidente de la colonia, las necesidades básicas fueron el principal motor de la organización comunitaria y, por ende, de la construcción de la colonia.

Ah sí, había más participación, ahora convocar la gente que participa, que realmente la gente ya no tiene, siente que ya no tiene necesidades tan apremiantes como se tenían

antes. Ya hay agua que era uno de los servicios que más se requerían, había ocasiones en que había que irse a dormir ahí a La Garza [lugar de toma de agua del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM)] para que mandaran una pipa, cuando ya después el gobierno empezó a mandar pipas gratis entre comillas, porque si no le dabas su dinero al chofer no la dejaba... Pero ahorita ya eso se acabó, ya no hay esa necesidad, entonces la gente ya no participa tanto (Oscar, 72 años, expresidente de colonia, 12/10/2009).

El abandono de los Comités de Manzana y de otras formas de organización vecinal se produce en un contexto de, por una parte, transformación del sistema político de la ciudad resultado de la apertura electoral y consolidación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dentro de la política local; y, por la otra, de la entrada en funcionamiento de un conjunto de nuevos programas sociales. Es bajo este marco que en el año 2000 se instauró oficialmente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley sobre el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal. En Iztapalapa, estas leyes se tradujeron en la instauración, también en el año 2000, del Programa de Atención a Personas Adultas Mayores de Iztapalapa, ya citado.

Aunque es difícil argumentar que la puesta en marcha de programas sociales de tipo participativo implica la reducción de los espacios autónomos organizativos, éstos sí configuran un nuevo escenario para las relaciones políticas y sociales en la ciudad. De acuerdo con Bryan Roberts (2002), el nuevo modelo estatal puesto en marcha en América Latina a partir de políticas y programas sociales focalizados conlleva una «mayor penetración del estado en los asuntos locales y en la vida de los ciudadanos que la del viejo modelo burocrático, cuyo alcance estaba limitado por su ineficiencia» (2002: 406). En el caso de la Ciudad de México, el nuevo esquema de las acciones de gobierno no ha significado la canalización eficiente de las demandas de los sectores menos favorecidos, o que su funcionamiento materialice el ejercicio de derechos para la población beneficiaria; por el contrario, estos programas y políticas se mezclan con los sistemas de relaciones y prácticas existentes, los cuales están respaldados tanto en formas de intercambio clientelar como en procesos organizativos.

En el caso del Programa de Atención a Personas Adultas Mayores en Iztapalapa, éste no siempre ha seguido el principio de derechos y, por el contrario, ha estado atravesado por las disputas partidistas y la presencia histórica de líderes locales en la zona. En la sierra Santa Catarina, particularmente, la creación de grupos de adultos mayores ha estado vinculada al conflicto y división interna del partido dominante en la delegación, el PRD. Así, los grupos de adultos mayores, como el grupo Lazos, se han constituido en cotos de poder de las dos corrientes internas del partido (situación que empeora en época de elecciones), las cuales se disputan el control territorial y político de la zona. Al respecto, en las conversaciones con la coordinadora del grupo, se evidencia el carácter político que han tomado estos grupos y su utilización por parte de políticos locales.

Pues empezaron a surgir como grupos vulnerables que la Delegación hacía, pero tenía uno en cada Centro Comunitario, entonces yo creo que a partir de que vieron que sí funcionaba, que los adultos mayores sí se concentraban, pues empezaron a tomarlo así

como capital político, digo yo, porque ellos empezaron a hacer más grupos en otras partes, pero realmente empezamos pocos con un trabajo social (Clara, coordinadora grupo Lazos, 29/07/09).

Si bien este programa social se enmarca en el reconocimiento de los derechos de la población de adultos mayores del Distrito Federal, promovido por el gobierno de López Obrador (2000-2006), a partir de dicho reconocimiento el PRD ha fortalecido su base política y electoral en la ciudad. Por lo tanto, el impulso al Programa de Atención a Personas Adultas Mayores en Iztapalapa no sólo significó la redefinición e inclusión de derechos sociales, sino que, a su vez, materializó el interés del partido por ampliar sus bases sociales. Para el año 2008, se estimó la existencia de 539 grupos de adultos mayores en toda la delegación, de los cuales 113 se ubicaban en la sierra Santa Catarina (EVALUA D.F. 2008).

De este modo, el programa se encuentra doblemente influenciado, por una parte, por su vínculo con un líder carismático como es López Obrador, a quien se le atribuye el reconocimiento de los derechos de este grupo de la población y, por otra parte, por las divisiones internas del PRD que a nivel local se magnifican en la disputa por el territorio.

El nuevo contexto institucional y político en la ciudad, aunado al establecimiento de un programa social focalizado, provocó la generación de un nuevo esquema de organización social ya no fundamentado en la demanda de derechos urbanos básicos, sino basado en las necesidades de una población específica e inscrito en la disputa partidista de carácter local. En este sentido, la instauración del Programa de Atención a Personas Adultas Mayores genera el reacomodo de las prácticas sociales y políticas. Sin embargo, esto no ha significado el abandono de los procesos organizativos. De hecho gran parte del éxito de los grupos de adultos mayores en la delegación se debe a que se asientan sobre formas organizativas que los habitantes reconocen y se apropian con facilidad. En entrevista con un asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sede oriente, éste señala la importancia y variedad de procesos organizativos que permanecen en la delegación.

En Iztapalapa hay una mentalidad de estar organizados, es una cosa interesante que no creo que haya una delegación con tanta organización como Iztapalapa (Ángel, asesor de la CDHDF, 23/09/2008).

Sin duda, en el proceso organizativo se recuperan las prácticas y repertorios aprendidos, no obstante, en el nuevo escenario es preciso afinar las herramientas de negociación con políticos locales como parte de un intercambio clientelar, así como en la demanda del ejercicio de derechos reconocidos legalmente. Esto ha promovido la profesionalización de los líderes, quienes deben conocer el programa y su andamiaje jurídico, a la vez que coordinan las actividades del grupo.

A pesar de los obstáculos, la pertenencia a un grupo les permite a los adultos mayores acceder a ciertos bienes y servicios públicos que de otro modo no podrían obtener, tanto en el ámbito formal como en el informal. Los principales servicios y bienes que

otorga el programa social son: despensas (para la población menor de 68 años), paseos y un vestuario deportivo (con propaganda del Gobierno de la Ciudad). Uno de los bienes más valorados son las despensas, ya que, para las familias de bajos recursos, éstas representan un apoyo significativo en su economía doméstica. La distribución de despensas, así como de otros recursos y beneficios establecidos en el Programa de Atención a Personas Adultas Mayores, está mediada por las preferencias y afinidades políticas entre los grupos de adultos mayores de la zona y el grupo de poder que detenta la delegación o la Dirección Territorial de Santa Catarina. Paralelamente, el grupo recibe despensas por medio de un diputado federal que es cercano a la organización México Nuevo. La frecuencia y distribución de éstas depende del diputado, el número de despensas disponibles y las preferencias de los coordinadores del grupo. Por lo tanto, la distribución es inequitativa, no institucionalizada y responde a los tiempos y la coyuntura política.

En conjunto, el desarrollo de este programa social se realiza a partir de un entramado complejo de intercambios que superan los votos por favores y dan cuenta de una relación de confianza y amistad. Cabe destacar que las relaciones de intercambio están mediadas por la pertenencia de los adultos mayores a un espacio organizativo. Es decir, la red de intercambio es posible en la organización y no de manera individual, pero también es en la organización donde se llevan a cabo otros procesos de socialización e inclusión, lo que se traduce en que las formas organizativas y relaciones de intercambio político no sean dimensiones contrapuestas, sino que por el contrario se articulan en la definición de las prácticas y relaciones políticas de esta población.

Así, los miembros del grupo Lazos participan de una dinámica de intercambios y acuerdos que se configura a través de un programa social, pero no corresponde exclusivamente a la «utilización» política del mismo, sino que la puesta en marcha del programa social reproduce las relaciones y prácticas políticas de un contexto de partido dividido, de un líder carismático y de líderes locales en disputa por el control político del territorio. De este modo, el Programa de Atención a las Personas Adultas Mayores de Iztapalapa hace parte de un esquema de dominación donde el discurso de derechos se fortalece, pero permanecen las prácticas vinculadas a líderes locales que dificultan el ejercicio real de estos derechos.

En la sierra Santa Catarina se evidencia el peso que han tenido las organizaciones en la configuración del espacio social, como un eje de disputa por la inclusión de los grupos menos favorecidos en la vida de la ciudad. Si bien los marcos institucionales han creado un camino apto para fortalecer los procesos organizativos, a partir tanto de los Comités de Manzana como de los actuales programas sociales, éstos han sobrepasado los límites formales y se arraigan en las comunidades como ámbitos de lucha por la mejora de las condiciones sociales y económicas que vive la población en la periferia oriente de la ciudad. Así, el crecimiento y la consolidación de la ciudad están inmersos en un contexto político en el cual tanto líderes como organizaciones sociales continúan siendo el eje central de la construcción social del espacio.

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La disputa por la producción social del espacio urbano en la periferia oriente de la Ciudad de México le ha implicado a sus habitantes forjar herramientas para obtener bienes y recursos públicos a través de la puesta en marcha de prácticas autónomas y organizativas, así como de la apertura de espacios de negociación tanto con el gobierno, como con líderes locales. De este modo, la periferia urbana ha tomado forma en el contexto de la producción de un espacio social y político, donde las relaciones entre los sujetos y el Estado han marcado o graficado el paisaje urbano.

La configuración de la periferia oriente ha estado, desde sus inicios, asociada a procesos políticos que responden a la tensión entre las formas organizativas y las relaciones de intercambio clientelar. Por una parte, es mediante las redes de intercambio que los sectores menos favorecidos lograron acceder a servicios urbanos mínimos a cambio del apoyo a líderes y políticos locales. Pero, por la otra, las formas organizativas, en sus diferentes escalas, han impulsado procesos de negociación, presión e, incluso, confrontación por la instauración de derechos urbanos básicos. En suma, las prácticas y relaciones sociales y políticas han cimentado las bases mismas del espacio urbano en la periferia oriente de la ciudad.

No obstante, dichas prácticas y relaciones sociales y políticas no han sido homogéneas, ni han permanecido iguales a lo largo de las últimas tres décadas. Por el contrario, los cambios realizados en el sistema político de la ciudad, aunado a otras transformaciones en el ámbito económico y en la estructura institucional, han significado la actualización y transformación de los procesos organizativos, del papel de los líderes locales y de la relación entre los sujetos y las instituciones del Estado.

En primer lugar, el nuevo escenario de constreñimientos y oportunidades ha promovido el salto de un movimiento urbano popular más o menos consolidado y aglutinador a la emergencia de pequeñas organizaciones sociales urbanas que demandan, entre otras, la mejora de las condiciones de vida en la periferia. Este nuevo espectro de organizaciones sociales ha ampliado su ámbito de acción, pero también ha enriquecido sus exigencias ya no centradas únicamente en la instalación de servicios básicos y equipamientos colectivos, sino ahora también enfocadas en la calidad de dichos servicios y equipamientos, en la participación real de los sujetos en la vida urbana y, en algunos casos, en el derecho a la ciudad.

De este modo, las dos organizaciones aquí revisadas dan cuenta de las transformaciones y adaptaciones que se han requerido a lo largo de las últimas décadas, para permanecer en la esfera pública de la ciudad y, a la vez, seguir demandando la mejora en las condiciones de vida en las zonas de menores recursos. Estos procesos organizativos han logrado transformar el espacio social al hacer evidentes las necesidades de grupos de la población que han permanecido olvidados y que sobreviven en condiciones precarias. Esto ha necesitado la puesta en marcha de variados repertorios de acción, los cuales se han adaptado a los cambios políticos y locales, pero mantienen como eje central el proceso organizativo.

No obstante la adecuación y transformación de las organizaciones, cabe señalar la permanencia de una noción de lucha, de la capacidad de demanda y de confrontación con las instituciones del Estado, prácticas aprendidas y aprehendidas desde el movimiento urbano popular. Así, las organizaciones sociales urbanas constituyen aún en la actualidad una forma de relacionarse con el otro y un canal de expresión y lucha social para los habitantes de las periferias pobres.

En segundo lugar, los cambios en el contexto político también han significado la apertura del marco jurídico brindando herramientas legales a las organizaciones sociales urbanas para la gestión de sus demandas. Este marco jurídico, hasta cierto punto, trastoca la relación entre líderes locales y organizaciones, en la medida en que los sujetos y las organizaciones cuentan con asesoría jurídica, espacios de capacitación y mecanismos de acceso a la información; esto de la mano de la emergencia de un discurso de derechos cada vez más presente entre los pobladores con menores recursos.

En ambos casos el aprendizaje del marco legal e institucional ha sido clave para el avance de sus demandas. Por una parte, la líder de la Asociación Renovación ha logrado impulsar de manera exitosa procesos de construcción y autoconstrucción de viviendas en diversos predios en Iztapalapa, así como en otras zonas de la ciudad, gracias a la gestión y negociación con las entidades públicas correspondientes. Por otra parte, el grupo de adultos mayores ha conseguido demandar por los derechos establecidos en el Programa de Atención a Personas Adultas Mayores y establecer caminos institucionales para el acceso a los bienes y servicios establecidos en el mismo.

Por último, la presencia de líderes locales continúa teniendo gran importancia en la configuración de las prácticas y las relaciones políticas y sociales en la periferia oriente de la ciudad. Las formas organizativas se alimentan de la presencia y capacidad de líderes que tanto desde la institucionalidad, como desde la informalidad, canalizan las demandas y obtienen beneficios para los miembros de las organizaciones. En muchos de los casos los programas sociales focalizados han fortalecido a líderes, quienes tienen el control sobre la distribución, asignación y acceso a los recursos y servicios públicos definidos en los mismos. De este modo, los líderes se respaldan sobre una estructura jerárquica y autoritaria, que les permite amplio control del flujo de recursos, así como de los sujetos y las relaciones sociales. Lo anterior es posible en el marco de una institucionalidad democrática débil que se asienta sobre las estructuras de poder y dominación a nivel local.

Los líderes locales, las relaciones de intercambio y los procesos organizativos no constituyen elementos aislados, por el contrario, están fuertemente imbricados y dependen uno del otro. Los casos revisados, aunque con orígenes diferentes, puesto que la Asociación Renovación nace de un proceso de abajo hacia arriba inserto en el movimiento urbano popular, mientras que el grupo Lazos resulta de un proceso de arriba hacia abajo producto de la implementación de un programa social específico, evidencian la centralidad de los líderes en la configuración de prácticas y relaciones políticas y sociales. Allí, los líderes han iniciado y fomentado los procesos organizativos, a la vez que facilitaron la instauración de espacios de mediación entre los sujetos y el Estado. A través de la organización se llevaron a cabo procesos de presión –plantones, marchas, cierres de avenidas–,

entre otros, pero a través de los líderes se concretaron también los procesos de negociación y acuerdo con las administraciones locales. Son los líderes quienes tienen la capacidad de negociar y gestionar las demandas del grupo, pero es en dicha mediación donde se concretan relaciones de intercambio y se crean lazos clientelares.

En conjunto estos procesos se materializan en el espacio urbano. La labor de las organizaciones sociales y líderes, a través de las demandas clásicas (vivienda, electricidad, agua, drenaje, etc.), o bien mediante la gestión de nuevos apoyos e intercambios, ha dado forma a la periferia urbana como un espacio en constante conflicto y tensión en la disputa tanto por el acceso a bienes y servicios básicos, como por el disfrute de la vida urbana y la participación social. En este sentido, la producción del espacio urbano ha sido también la producción de un espacio político, el cual, en el caso de la Ciudad de México, no es, ni ha sido, democrático ni plural. Sin embargo, cabe reiterar que es por medio de formas organizativas que los sectores menos favorecidos han podido hacer frente a las condiciones de precariedad que se viven en las zonas olvidadas de la ciudad. Las organizaciones han marcado la producción del espacio urbano y se mantienen en el escenario político local con demandas cada vez más focalizadas. Allí ha tomado forma un sujeto político que por mucho tiempo estuvo invisibilizado y el cual en la actualidad conoce y reclama el ejercicio de sus derechos.

Aún queda mucho por estudiar sobre las organizaciones sociales en las ciudades contemporáneas y su adaptación a los cambios propios de la reestructuración económica y política que se ha vivido en América Latina a partir de la década de los noventa. Si bien el movimiento urbano popular parece cada vez más olvidado y lejano, en las periferias pobres de los centros urbanos se mantienen y refuerzan día con día formas organizativas que concretan imaginarios y prácticas aprendidas desde el movimiento urbano popular, las cuales han transformado la ciudad y a sus habitantes.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- ADLER-LOMNITZ, Larissa; ADLER, Ilya y SALAZAR, Rodrigo. *Simbolismo y ritual en la política mexicana*. México D.F.: Siglo XXI Editores, UNAM, 2004.
- ALONSO, Jorge. Movimientos sociales en el Valle de México. Una introducción. En ALONSO, Jorge (ed.). *Los movimientos sociales en el Valle de México* (Tomo I). México: CIESAS, 1986: 17-52.
- ÁLVAREZ, Lucía. *La sociedad civil en la ciudad de México: actores sociales, oportunidades políticas y esfera pública*. México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Plaza y Valdés, 2004.
- ÁLVAREZ, Lucía. *Distrito Federal: sociedad, economía, política y cultura*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, 2005.
- AUYERO, Javier. The logic of clientelism in Argentina: An ethnographic account. *Latin American Research Review*, 2000, vol. 35 (3): 55-81.
- AUYERO, Javier. *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires: Cuadernos Argentinos Manantial, 2001.

- BERRÍO PUERTA, Ayder. La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. *Estudios Políticos*, 2006, vol. 29 (julio-diciembre): 219-236.
- BOLOS, Silvia. *Actores sociales y demandas urbanas*. México: Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés, 1995.
- CARRERA, Alberto. *Participación ciudadana y comunicación en la gestión del desarrollo urbano. El caso del programa parcial de desarrollo urbano para el Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México*. Tesis de maestría en Comunicación. Universidad Iberoamericana. México, 2005.
- CASTELLS, Manuel. *La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos*. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
- COULOMB, René. Mesa II. Las organizaciones sociales y su relación con los partidos políticos y las ONG. En BOLOS, Silvia (ed.). *Actores sociales y demandas urbanas*. México: Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés, 1995: 153-212.
- CUÉLLAR, Angélica. Qué ha cambiado y qué permanece en los movimientos sociales urbanos del Distrito Federal (Una aproximación). En ÁLVAREZ, Lucía (ed.). *Participación y democracia en la Ciudad de México*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, La Jornada Ediciones, 1997: 267-285.
- EVALUA D.F. *Evaluación Externa del Programa de Desarrollo Social de la Delegación Iztapalapa, 2008*. México: EVALUA D.F., Secretaría de Desarrollo Social, 2009; en línea: http://www.evalua.df.gob.mx/files/recomendaciones/evaluaciones_finales/anexos_iztp.pdf. Fecha de consulta: 12 marzo 2013.
- GALINDO, Luis Jesús. *Movimiento urbano popular y cultura política. Análisis del caso de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal*. México: [s. e.], 1985.
- HARVEY, David. *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1998.
- HOLSTON, James. *Insurgent Citizenship: Disjunctions of democracy and modernity in Brazil*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- INEGI, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. *Censo de Población y Vivienda 2010*. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010.
- MOCTEZUMA, Pedro. El movimiento urbano popular mexicano. *Nueva Antropología*, 1984, vol. IV (24): 62-87.
- OLVERA, Alberto. Cambios en los patrones de acción colectiva y en el nuevo asociativismo en México. *Cuadernos de Trabajo. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales*. Universidad Veracruzana (julio), 1998.
- ROBERTS, Bryan. Nuevos modelos de crecimiento y sus desafíos para los derechos sociales y la política social. En KAZTMAN, Rubén y WORMALD, Guillermo (eds.). *Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*. Montevideo: CEBDA, Comunicación Social, 2002: 399-422.
- RONIGER, Luis. The comparative study of clientelism and the changing nature of civil society in the contemporary world. En RONIGER, Luis y GÜNES-AYATA, Ayse (eds.). *Democracy, Clientelism and Civil Society*. London: Lynne Rienner Publishers, 1994: 1-17.
- TAPIA, Luis. *Política Salvaje*. La Paz: Muela del Diablo Editores, Comuna, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008.
- ZIBECCHI, Raúl. *Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas*. Buenos Aires: La Vaca, 2008.